Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro.

**VISTO** en el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión número **12568/INFOEM/IP/RR/2022**, promovido por **una persona que no proporcionó datos para ser identificada**, quien en lo sucesivo se denominará como  **RECURRENTE**, en contra de la respuesta del **Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal**, en adelante el **SUJETO OBLIGADO,** se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

## **ANTECEDENTES0**

1. El uno de julio de dos mil veintidós, sepresentaronvía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX),** la solicitud de información pública registrada con el número **00249/COACALCO/IP/2022,** mediante la cual se requirió lo siguiente:

*“TITULO PROFESIONAL O CEDULA PROFESIONAL, FICHA CURRICULAR EN VERSIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL DE LOS TITULARES DE ÁREA Y DIRECTORES DE ÁREA DEL SUJETO OBLIGADO” (Sic)*

1. Se señaló como modalidad de entrega de la información: a través de **SAIMEX.**
2. El ocho de julio de dos mil veintidós, el **SUJETO OBLIGADO** emitió respuesta a la solicitud de información, en los siguientes términos:

*“Con fundamento en el articulo 53 Fracción II y 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se da respuesta a la presente solicitud con el oficio que emite la Dirección de Administración del cual se anexa copia, así como la respuesta integradora por parte de la Unidad de Transparencia cumpliendo en tiempo y forma con lo solicitado.” (Sic)*

Archivos adjuntos:

[**SOLICITUD #00249.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/1506701.page): Documento de treinta y seis páginas, que contiene la **copia digitalizada de diversos certificados de competencia laboral, certificados de estudio, diplomas, constancias y nombramientos.**

[**RESPUESTA AL SOLICITANTE 00249\_2022.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/1506702.page): Oficio suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, por medio del cual, **informó que el Servidor Público Habilitado de la Dirección de Administración entregó respuesta a través del oficio DA/1449/2022.**

[**CONTESTACION ADMON 00249\_2022.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/1506703.page): Oficio DA/1449/2022, suscrito por la Directora de Administración, por medio del cual, **refirió que para consultar las cédulas profesionales de los Titulares y Directores de Área, se deberá acceder a la página de Registro Nacional de Profesionistas e insertó una liga electrónica.** **Respecto a la ficha curricular, refirió que esta información se encentra publicada en el Portal de IPOMEX e insertó una liga electrónica, asimismo, señaló un procedimiento para acceder a la información.** Finalmente, **refirió hacer entrega de los certificados de competencia laboral de los Directores que lo habían obtenido, así como los nombramientos, el Título, historial académico y Diploma de los Directores de los cuales su cédula profesional se encuentra en trámite.**

1. El once de julio de dos mil veintidós, se interpuso el recurso de revisión, en contra de la respuesta, señalando como:

**Acto impugnado**: *“Existen diversas irregularidades en la respuesta a la solicitud” (Sic)*

**Razones o Motivos de inconformidad**: *“****No entrego la totalidad de la información*** *solicitada, hace mención que* ***las cédulas profesionales debo buscarlas en el Registro Nacional de profesione****s, cuando es su obligación proporcionarlas si el documento se encuentra en su poder.* ***Testo de manera incorrecta los datos personales.*** *El sujeto obligado NO está obligado a entregar la información que no está en su poder, pero si la que tiene. Vuelve a hacer mención a* ***la fracción de IPOMEX donde NO se encuentra la información solicitada****” (Sic)*

1. La Comisionada Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, a través del acuerdo de admisión del uno de agosto de de dos mil veintitrés, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **SAIMEX,** a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a su derecho conviniera, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentará el Informe Justificado procedente.
2. El cuatro de agosto de dos mil veintidós, el **SUJETO OBLIGADO** rindió su informe justificado por medio de los siguientes archivos electrónicos:

[**RR\_12568\_2022\_0001.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/1524216.page): Oficio suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, por medio del cual, refirió hacer entrega del oficio **DA/1529/2022** y anexo digital **RR/2568 ADMON.pdf,** los cuales contienen la respuesta emitida por la Dirección de administración.

[**CONTESTACION ADMON RR\_12568\_2022\_0001.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/1524217.page): Oficio número DA/1529/2022 suscrito por la Directora de Administración, por medio del cual, reiteró que la información curricular de los Titulares se encuentra cargada en el IPOMEX y, adjuntó dos capturas de pantallas en las que se observa el registro 1 y 2 correspondientes a la Directora de Administración y de la Coordinadora de Mejora Regulatoria, respectivamente; aunado a lo anterior, precisó que la información podría ser descargada y visualizada en los hipervínculos, en formato PDF. Por otro lado, refirió hacer entrega de la copia simple de las consultas realizadas en el Sistema Nacional de Cédulas Profesionales, así como, el Título, Historial Académico y Diploma de los Directores y Titulares de área de los cuales su cédula se encuentra en trámite.

[**R.R.12568 SAIMEX ADMON.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/1524218.page): Documento de veinticuatro páginas, que contiene la **copia digitalizada de la consulta de cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesiones; así como, Títulos Profesionales, certificados de estudio, constancias y diplomas.**

1. El veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se notificó el acuerdo mediante el cual se amplió el plazo para emitir resolución por un término de 15 días adicionales.
2. Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos dentro del primer semestre del año dos mil veintidós, que, en comparación con los recibidos el año pasado dentro del mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400%, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
3. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
4. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
5. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
6. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

a) Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

b) Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.

c) Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

1. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
2. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
3. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
4. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

1. Por ello, este Organismo Garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto resulta de carácter excepcional
2. La Comisionada Ponente decretó el cierre de instrucción mediante acuerdo del siete de marzo de dos mil veinticuatro; por lo que se ordenó turnar el expediente a resolución, misma que ahora se pronuncia; y - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

## **CONSIDERANDO**

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 10, 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## **SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. El medio de impugnación fue presentado a través del **SAIMEX** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; siendo así que el **SUJETO OBLIGADO** entregó respuesta el ocho de julio de dos mil veintidós, de tal forma que el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del once de julio al doce de agosto de dos mil veintidós, en consecuencia, si la parte **RECURRENTE** presentó su inconformidad el nueve de julio de dos mil veintidós, se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. Consecuencia, este Órgano Garante advierte que el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

## **TERCERO. Del planteamiento de la *Litis.***

1. El **RECURRENTE** solicitó el Título o Cédula Profesional, ficha curricular, nombramiento y certificación de competencia laboral de los Titulares y Directores de Área del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal.
2. En respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** por medio del Servidor Público Habilitado de la Dirección de Administración, refirió que para consultar las cédulas profesionales de los Titulares y Directores de Área, se deberá acceder a la página de Registro Nacional de Profesionistas e insertó la liga electrónica <http://cedulaprofesional.sep.gob.mx> . Respecto a las fichas curriculares, refirió que se encentran publicadas en el Portal de IPOMEX e insertó la liga electrónica <https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/coacalco.web>, asimismo, señaló como procedimiento para acceder a la información: seleccionar la fracción XXI y, posteriormente, descargar la información del año que se desea consultar. Finalmente, refirió hacer entrega de los certificados de competencia laboral de los Directores que lo habían obtenido, así como, los nombramientos, el Título, historial académico y Diploma de los Directores de los cuales su cédula profesional se encuentra en trámite, al respecto, remitió diversas documentales.
3. El **RECURRENTE** impugnó la respuesta mediante recurso de revisión, en el que se inconformó por: la clasificación de la información y la entrega de información incompleta; al señalar que, el **SUJETO OBLIGADO** le solicitó buscar las cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesiones; y que, en la fracción de IPOMEX proporcionada no se encuentra lo requerido.
4. En dichas condiciones, la *Litis* a resolver en el presente recurso de revisión se circunscribe a determinar si se actualizan la causal de procedencia prevista en el artículo 179, fracciónII y V y de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios**; fracciones que determinan la hipótesis jurídica relativa a la clasificación de la información y la entrega de información incompleta; contexto del cual se dolió la **RECURRENTE** al momento de interponer su recurso de revisión; asimismo, determinar si se vulnera el derecho de acceso a la información de la particular por la inobservancia a los principios contenidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales señala entre otros, que en la generación y entrega de información se deberá garantizar que sea oportuna, expedita, completa e integral.

## **CUARTO. Del estudio y resolución del asunto.**

1. El Derecho de Acceso a la Información Pública, es un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Particular del Estado de México.
2. Definiendo el Derecho de Acceso a la Información Pública como: *La igualdad de* oportunidades *para recibir, buscar e impartir información[[1]](#footnote-1)en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,[[2]](#footnote-2)*que se constituye como una herramienta fundamental para ejercer *el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas,[[3]](#footnote-3)*fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública,[[4]](#footnote-4)*que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.*
3. En México, además de los derechos, están reconocidas las garantías para su protección, en ese sentido el párrafo tercero de artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:

*“****Artículo 1.-***

*(…)*

*Todas las* *autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

*(…)*”

**(Énfasis Añadido)**

1. Por lo anterior, se deduce que el Derecho de Acceso a la Información Pública es un Derecho Humano de Fuente Internacional y Constitucionalmente reconocido. Además del derecho, también se reconocen garantías para su protección, lo que vincula con el mandato del párrafo tercero de mismo artículo.
2. Así conforme a la Constitución Política de las Estado Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México respectivamente, el cumplimiento de las garantías primarias, entendidas como obligaciones inmediatamente relacionadas con el Derecho de Acceso a la Información Pública, permiten que todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones lo respeten, protejan y garanticen.

***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

***“Artículo 6.*** *…*

*…*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A****.* ***Para el ejercicio del derecho de acceso a la información****, la Federación y* ***las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:***

***I. Toda la información en posesión de cualquier******autoridad****, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y* ***municipal****,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

**(Énfasis añadido)**

***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***

***“Artículo 5****.- …*

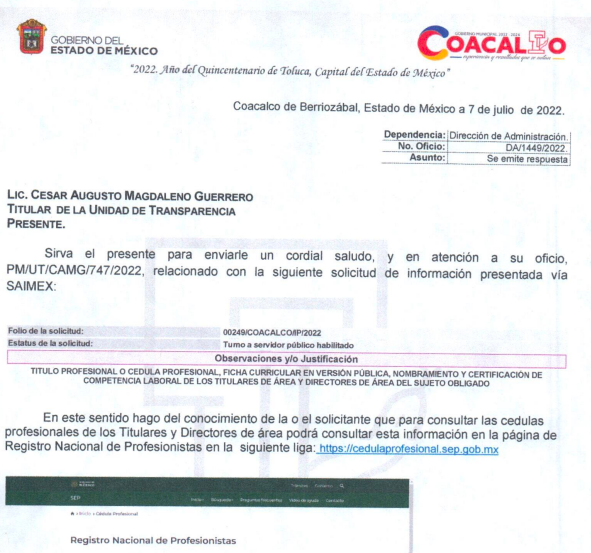
*…*

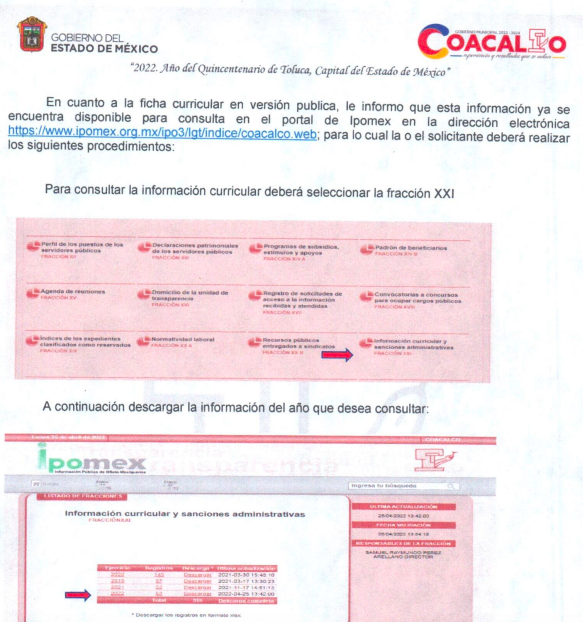
***El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho****.*

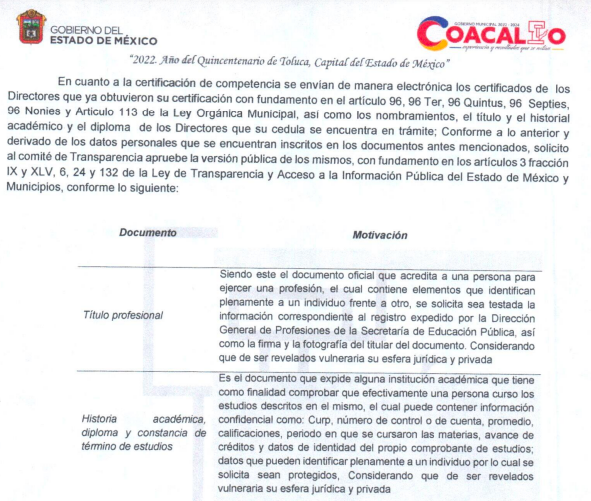
*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

***Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes****:*

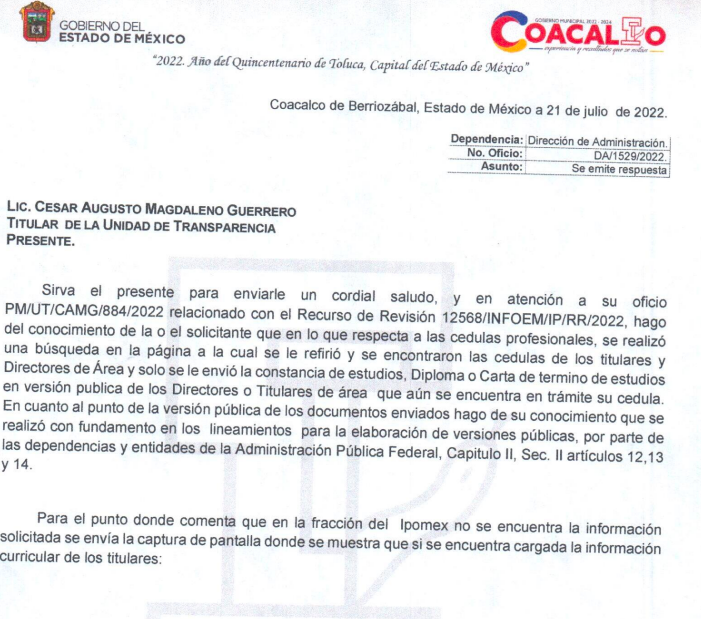
1. ***Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los*** *Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y* ***municipales****, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad****.* ***Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*
2. Según el artículo 150 de la Ley de Transparencia del Estado, la solicitud es la garantía primaria del Derecho de Acceso a la Información, además, establece que se regirá *por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares*, contemplando el derecho de las personas con discapacidad y hablantes de lengua indígena.
3. El Derecho de Acceso a la Información se garantiza y respeta oportunamente, y según lo que dispone la Ley, las *solicitudes de acceso a la información*.
4. Así entonces, se procede analizar, en primer lugar, si el **SUJETO OBLIGADO** al atender la solicitud de acceso a la información, satisfizo la garantía primaria del derecho según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y en segundo término si cumplió con su deber de respetar y garantizar el derecho, entregando la información solicitada.
   1. **De la información solicitada y la respuesta del SUJETO OBLIGADO.**
5. Derivado del Planteamiento de la Litis, se procede a analizar el contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico y con ello, este Órgano Garante dicte la resolución correspondiente, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y apegándose en todo momento al principio de máxima publicidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
6. Así, debemos recapitular que el **RECURRENTE** requirió, el Título o Cédula Profesional, ficha curricular, nombramiento y certificación de competencia laboral de los Titulares y Directores de Área del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal.
7. Mediante respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** por medio del Servidor Público Habilitado de la Dirección de Administración, refirió que para consultar las **cédulas profesionales** de los Titulares y Directores de Área, se deberá acceder a la página de Registro Nacional de Profesionistas e insertó la liga electrónica <http://cedulaprofesional.sep.gob.mx> . Respecto a las **fichas curriculares**, refirió que se encentran publicadas en el Portal de IPOMEX e insertó la liga electrónica <https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/coacalco.web>, asimismo, señaló como procedimiento para acceder a la información: seleccionar la fracción XXI y, posteriormente, descargar la información del año que se desea consultar. Finalmente, refirió hacer entrega de los **certificados de competencia laboral** de los Directores que lo habían obtenido, así como, los **nombramientos**, el **Título**, historial académico y Diploma de los Directores de los cuales su cédula profesional se encuentra en trámite, al respecto, remitió diversas documentales.



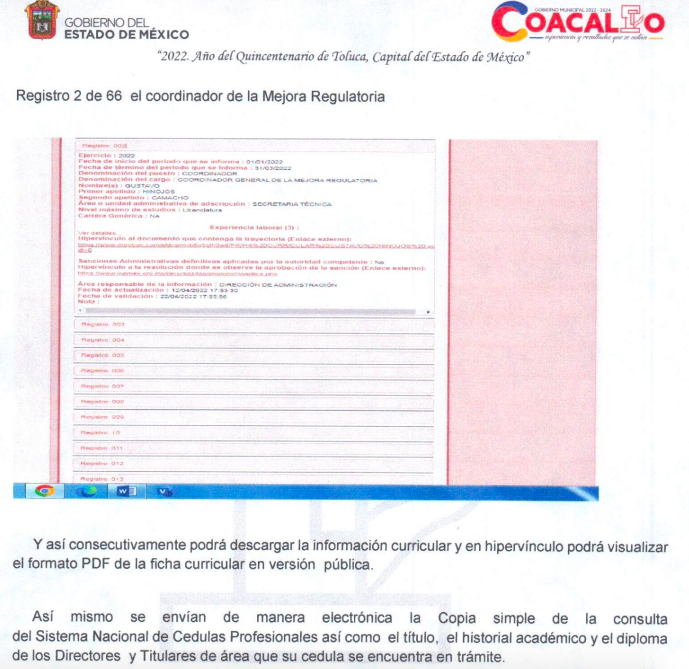




1. En consecuencia, el **RECURRENTE** impugnó la respuesta mediante recurso de revisión, en el que se inconformó por: la clasificación de la información y la entrega de información incompleta; al señalar que, el **SUJETO OBLIGADO** le solicitó **buscar las cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesiones**; y que, **en la fracción de IPOMEX proporcionada no se encuentra lo requerido.**
2. Así, mediante un acto jurídico posterior a la interposición del recurso de revisión, como lo es la etapa de manifestaciones, el **SUJETO OBLIGADO** rindió el informe justificado correspondiente, por medio del cual, la Directora de Administración **reiteró que la información curricular de los Titulares se encuentra cargada en el IPOMEX** y adjuntó dos capturas de pantalla en las que se observa el registro 1 y 2 correspondientes a la Directora de Administración y la Coordinadora de Mejora Regulatoria, respectivamente; asimismo, precisó que la información podría ser descargada y visualizada en los hipervínculos, en formato PDF. Por otro lado, **refirió hacer entrega de la copia simple de las consultas realizadas en el Sistema Nacional de Cédulas Profesionales**, así como, el **Título**, Historial Académico y Diploma de los Directores y Titulares de área de los cuales su cédula se encuentra en trámite. Como se observa:



**(…)**



**(…)**

1. En este caso, se advierte que el **RECURRENTE** no se inconformó por la totalidad de la respuesta. Bajo ese tenor, se tiene que la parte de la respuesta que no fue impugnada debe declararse como consentida, toda vez que, al no haber realizado manifestaciones de inconformidad al respecto, se infiere que la información proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO** satisface este punto de la solicitud presentada.
2. Lo anterior es así, debido a que cuando un Recurrente impugna la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, y éste no expresa Razón o Motivo de Inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, dichos rubros deben declararse atendidos, pues se entiende que el **RECURRENTE** está conforme con la información entregada al no contravenir la misma. Sirve de Apoyo a lo anterior, por analogía la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

***“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.*** *Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.”*

1. Consecuentemente, se reitera que la parte de la solicitud que no fue impugnada debe declararse consentida por el **RECURRENTE**, en razón de que no se realizaron manifestaciones de inconformidad, por lo que no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado ya que se infiere un consentimiento del **RECURRENTE** ante la falta de impugnación eficaz.
2. Sirve de sustento a lo anterior por analogía la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

1. De lo anteriormente referido, y a efecto de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública que asiste al **RECURRENTE,** resulta conveniente precisar que el presente análisis versará únicamente sobre: **las cédulas profesionales y las fichas curriculares de los Titulares y Directores de área del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, así como, la versión pública de los documentos proporcionados de los cuales se refirió que la cédula profesional se encontraba en trámite.**
2. Precisado lo anterior, se procede a realizar el análisis de la información requerida y la proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO**; por medio del siguiente cuadro descriptivo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requerimientos** | **Respuesta e Informe Justificado** | **Colma** |
| **1. Ficha Curricular** de los Titulares y Directores de Área. | El Servidor Público Habilitado de la Dirección de Administración, refirió que las fichas curriculares se encentran publicadas en el Portal de IPOMEX e insertó la liga electrónica <https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/coacalco.web>, asimismo, señaló como procedimiento para acceder a la información: seleccionar la fracción XXI y descargar la información del año que se desea consultar, aunado a lo anterior, precisó que la información podría ser descargada y visualizada en los hipervínculos, en formato PDF. | **No.**  En IPOMEX no hay registros de 2022. |
| **2. Titulo o Cédula profesional** de los Titulares y Directores de Área. | En respuesta, el Servidor Público Habilitado de la Dirección de Administración, refirió que para consultar las cédulas profesionales de los Titulares y Directores de Área, se deberá acceder a la página de Registro Nacional de Profesionistas e insertó la liga electrónica <http://cedulaprofesional.sep.gob.mx>., por otro lado, remitió el Titulo de Maestría de la Tesorera Municipal.  Mediante informe justificado, refirió hacer entrega de la copia simple de las consultas realizadas en el Sistema Nacional de Cédulas Profesionales, así como, el Título, Historial Académico y Diploma de los Directores y Titulares de área de los cuales su cédula se encuentra en trámite. | **Parcialmente.**  Se realizó una versión pública incorrecta en los documentos entregados, correspondientes a los Titulares y Directores de Área, de los cuales, se refirió que la cédula profesional se encontraba en trámite *(se testó la fotografía de Servidores Públicos de mandos medios y superiores, por otro lado, se dejó a la vista un Código QR donde se puede consultar el promedio de un Servidor Público).*  Aunado a lo anterior, no se proporcionó el Acuerdo del Comité de Transparencia respectivo. |
| **3. Certificación de competencia laboral** de los Titulares y Directores de Área. | El Servidor Público Habilitado de la Dirección de Administración, refirió hacer entrega de los certificados de los Servidores Públicos que habían obtenido la certificación de competencia laboral con fundamento en la Ley Orgánica Municipal, de los cuales se advierten los siguientes: Tesorera Municipal, Director de Medio Ambiente, Contralor Municipal, Director de Desarrollo y Fomento Económico, Director de Obras Públicas, Titular de la Unidad de Transparencia (cédula de Evaluación). | **Si.**  Actos consentidos  (La información fue entregada de manera íntegra). |
| **4. Nombramiento** de los Titulares y Directores de Área. | El Servidor Público Habilitado de la Dirección de Administración remitió el nombramiento de los siguientes Servidores Públicos: Contralor Municipal, Secretaria del Ayuntamiento, Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Tesorera Municipal, Secretario Técnico de Presidencia, Directora de Administración, Directora de Gobierno, Director de Desarrollo Urbano, Director del Instituto Municipal de Planeación, Director de Medio Ambiente, Director de Obras Públicas, Director de Desarrollo Social, Director de Educación y Cultura, Titular del Instituto Municipal de la Mujer, Director de Desarrollo y Fomento Económico, Directora Jurídica, Directora de Comunicación Institucional, Defensora Municipal de Derechos Humanos, Titular de la Unidad de Transparencia. | **Si.**  Actos consentidos  (La información fue entregada de manera íntegra). |

* **Punto 1 del cuadro descriptivo.**

1. En este punto, ser reitera que el particular solicitó “la ficha curricular de los Titulares y Directores de la Administración Municipal del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal; así, mediante respuesta el **SUJETO OBLIGADO** refirió que la información podía ser consultada por medio de la liga electrónica <https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/coacalco.web>, asimismo, indico un procedimiento para acceder a la información, consistente en los siguiente: seleccionar la fracción XXI y descargar la información del año que se desea consultar, aunado a lo anterior, aunado a lo anterior, mediante informe justificado precisó que la información podría ser descargada y visualizada en los hipervínculos, en formato PDF.
2. En atención a lo anterior, este Órgano Garante accedió a la liga electrónica remitida en respuesta y siguió las indicaciones proporcionadas por el **SUJETO OBLIGADO**, no obstante, se advierte que **no se localizó el registro correspondiente al periodo fiscal 2022,** como se observa a continuación:



1. En este sentido, se reitera que el **RECURRENTE** se inconformó mediante recurso de revisión, señalando que en la fracción de IPOMEX no se encontraba lo solicitado.
2. En consecuencia, no se puede tener por atendido el requerimiento del Particular con la liga electrónica proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO**, ya que si bien, la información podría obrar en el Portal de Información Pública de Oficio de los Sujetos Obligados del Estado de México por corresponder a una obligación de transparencia común, no se existe registro del periodo solicitado.
3. Precisado lo anterior, resulta conveniente señalar que el *currículum vitae* o *ficha curricular* corresponde a una locución latina que literalmente significa “carrera de la vida”, y que la Real Academia Española de la Lengua[[5]](#footnote-5) ha definido como “la relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados y datos biográficos que califican a una persona”; así, en dicho documento, además de señalar datos personales de los particulares, se citan los estudios realizados o nivel académico, así como su experiencia laboral que incluye los cargos ocupados, períodos y sus funciones.
4. En este orden de ideas, los artículos 47, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y 92, fracción XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios señalan lo siguiente:

***Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios***

*“****ARTÍCULO 47****.* ***Para ingresar al servicio público se requiere****:*

***I. Presentar una solicitud utilizando la forma oficial que se autorice*** *por la institución pública o dependencia correspondiente;*

*(…)*

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios***

*“****Artículo 92****.* ***Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla****, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda,* ***la información, por lo menos****, de los temas, documentos y políticas* ***que a continuación se señalan****:*

*[…]*

***XXI.******La información curricular****, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;*

***(…)****”*

1. De los preceptos en cita, se advierte que para acreditar los requerimientos de **ingreso al servicio público** y las obligaciones de transparencia común, **EL SUJETO OBLIGADO**, debe contar en sus archivos con una serie de documentos, tales como la **ficha curricular**, el ***currículum vitae***, y la **solicitud de empleo.**
2. Correlativo a lo anterior, los “*Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia”****,*** en su Anexo I referente a las Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados contempladas en el artículo 70, fracción XVII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, precisan en los Criterios Sustantivos de Contenido con relación a la información curricular, lo siguiente:

***Anexo I***

***Obligaciones de transparencia comunes todos los sujetos obligados***

***Criterios para las obligaciones de transparencia comunes***

*El catálogo de la información que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en el Título Quinto, Capítulo II de la Ley General, en el artículo 70, fracciones I a la XLVIII.*

*En este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información determinan los datos, características y forma de organización de la información que publicarán y actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos obligados determinados en el artículo 23 de la Ley General.*

***Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública***

***“Artículo 70.*** *En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

*En las siguientes páginas se hace mención de cada una de las fracciones con sus respectivos criterios.*

*(…)*

***XVII.*** *La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;*

*De todos los(as) servidores(as) públicos(as) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado --desde el puesto de jefe de departamento o equivalente y hasta el titular— se deberá publicar la información curricular, es decir, los datos que permitan identificarlos y conocer su trayectoria en el ámbito laboral y escolar.*

*Asimismo, por cada servidor(a) público(a) el sujeto obligado especificará si ha sido acreedor a sanciones administrativas aplicadas por la autoridad u organismo competente en el sujeto obligado, y la información relativa a dichas sanciones, o en su caso, la leyenda en la que se aclare que no ha recibido sanción administrativa alguna. Esta información deberá ser coherente y guardar correspondencia con la publicada en la fracción XVIII (listado de servidores(as) públicos(as) con sanciones definitivas). Además, los sujetos obligados incluirán un hipervínculo al sistema de registro de sanciones administrativas que les corresponda; por ejemplo, en el caso de los sujetos obligados de la administración Pública Federal incluirán un hipervínculo al Sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública en el cual las personas podrán realizar consultas públicas.*

*La información publicada en cumplimiento de esta fracción deberá ser coherente y corresponder con la incluida en las fracciones II (estructura orgánica), VII (directorio de servidores(as) públicos(as)), VIII (remuneración), X (número total de plazas) y XIII (servidores(as) públicos(as) responsables de la atención y operación de la Unidad de Transparencia).*

*(…)*

***Criterios sustantivos de contenido***

*(…)*

***Criterio 2*** *Denominación del cargo, empleo, comisión o nombramiento otorgado*

***Criterio 3*** *Nombre(s), primer apellido y segundo apellido del (la) persona y/o servidor(a) público(a)*

*(…)*

*Información curricular del (la) servidor(a) público(a)) y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el sujeto obligado el cual deberá especificar lo siguiente:*

***Criterio 5*** *Escolaridad: Nivel máximo de estudios (ninguno, primaria, secundaria, bachillerato, técnica, licenciatura, maestría, doctorado, posdoctorado)*

***Criterio 6*** *Área de estudio, en su caso*

***Criterio 7*** *Carrera genérica, en su caso*

***Criterio 8*** *Experiencia laboral, especificar por lo menos los tres últimos empleos en donde se indique:*

***Criterio 9*** *Periodo (día/mes/año inicio, día/mes/año conclusión)*

***Criterio 10*** *Denominación de la Institución / empresa*

***Criterio 11*** *Cargo o puesto desempeñado*

***Criterio 12*** *Campo de experiencia*

*(…)*

***Formato 17 LGT\_Art\_70\_Fr\_XVII***

***Información curricular de los(as) servidores(as) públicas(os) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en <<sujeto obligado>>***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Clave o nivel del puesto* | *Denominación del cargo o nombramiento otorgado* | *Nombre del(la) servidor(a) público(a)* | | | *Unidad administrativa de adscripción (Área) del servidor público (catálogo, en su caso)* |
|
| *Nombre(s)* | *Primer Apellido* | *Segundo Apellido* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Información curricular* | | | | | | | | |
| *Escolaridad* | | | *Experiencia laboral (tres últimos empleos)* | | | | | |
| *Nivel máximo de estudios (ninguno, primaria, secundaria, bachillerato, técnica, licenciatura, maestría, doctorado, posdoctorado)* | *Área de estudio* | *Carrera genérica* | *inicio*  *(Periodo día/mes/año)* | *conclusión (Periodo día/mes/año)* | *Denominación de la Institución / empresa* | *Cargo o puesto desempeñado* | *Campo de experiencia* | *Hipervínculo a la versión pública del currículum* |

1. Así, el *Currículum Vitae* ***(*con o sin fotografía)**es un documento que no necesariamente, ha de constar en los archivos de los Sujeto Obligados; no obstante, de constar en los archivos de los mismos, éstos deben ser entregados a los particulares que así lo soliciten, de conformidad en los previsto en los artículos 4 y 12 de la Ley adjetiva.
2. Ahora bien, existen expresiones documentales, que acorde a las funciones, facultades, atribuciones y competencias de los Sujetos Obligados, pudieran reflejar la información que generalmente se contiene en el *Currículum Vitae*, tales como, la *solicitud de empleo*, a que hace referencia el artículo 47, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como, las *fichas curriculares* en cumplimiento al artículo 92, fracción XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y de los Lineamientos Técnicos Generales.
3. En consecuencia, se entiende que el **SUJETO OBLIGADO** genera (en cuanto a la ficha curricular), posee o administración dicha información (en cuanto al currículum vitae y solicitud de empleo); por lo que, deberá hacer entrega**, de ser procedente en versión pública, de la ficha curricular o documento análogo de los Titulares y Directores de Área adscritos a la Administración Municipal de Coacalco de Berriozábal al uno de julio de dos mil veintidós.**

* **Punto 2 del cuadro descriptivo.**

1. En este punto, el **RECURRENTE** solicitó “Título o Cédula Profesional” de los Titulares y Directores de Área del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal; así, mediante respuesta, el **SUJETO PBLIGADO** por medio del Servidor Público Habilitado de la Dirección de Administración, refirió que para consultar las cédulas profesionales de los Titulares y Directores de Área, se debería acceder a la página de Registro Nacional de Profesionistas e insertó la liga electrónica <http://cedulaprofesional.sep.gob.mx>.; por otro lado, refirió hacer entrega del Título Profesional, Historial Académico y Diplomas de los Directores y Titulares de Área de los cuales la cédula se encuentra en trámite.
2. En este sentido, se reitera que el **RECURRENTE** se inconformó mediante recurso de revisión, señalando que el **SUJETO OBLIGADO** le solicitó **buscar las cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesiones, aunado a que, se realizó una versión pública incorrecta en los documentos proporcionados.**
3. Ahora bien, mediante informe justificado, el **SUJETO OBLIGADO** hizo entrega de los registros de las Cédulas Profesionales, en consecuencia, resulta necesario señalar que tanto el ***Título* como la *Cédula Profesional*,** **son expresiones documentales homólogas con validez legal**, para certificar o demostrar que efectivamente una persona está calificado para ejercer la profesión para la cual se ha preparado; y, en lo particular **la cédula acredita que se ha recibido un título profesional,** conforme a lo referido en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública (consultada en la liga <http://consultatucedula.mx/>).
4. En ese orden de ideas, debe tenerse presente que la naturaleza del ***título y/o* *cédula profesional*,** consiste en la de ser documentos de identificación para que a sus titulares, los acrediten como profesionales o expertos en algún área de estudio o conocimiento frente a terceros; por lo que, proporcionar dicha información abona a la transparencia y a la rendición de cuentas, pues sirven a la ciudadanía para comprobar que las personas que se desempeñan como servidores públicos tienen el perfil idóneo, la capacidad, las habilidades y la pericia para desarrollar las actividades y atribuciones que se deriven de su encargo.
5. Con relación a la ***cédula profesional*,** resulta conveniente reiterar lo establecido por el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que refiere que para ingresar al servicio público se requiere, entre otras cosas, cumplir con los requisitos que se establezcan para los diferentes puestos, como es el nivel académico.
6. En este sentido, es de señalar que la ***cédula profesional*,** es aquella expresión documental con validez legal, para certificar o demostrar que efectivamente una persona está calificado para ejercer la profesión para la cual se ha preparado y ha recibido un título profesional, conforme a lo referido en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública (consultada en la liga <http://consultatucedula.mx/>).
7. Por lo que **dicho documento, es aquel que adquiere toda persona a quien legalmente se le haya expedido *título profesional o grado académico equivalente***, con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado la cual es otorgada por la **Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública**, ya que **dicha autoridad tiene atribuciones para expedir la cédula correspondiente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales,** lo anterior toma sustento en los artículos 3° y 23, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México.
8. Así, los documentos que dan cuenta de la preparación académica sirven como medios de identificación, para que a su titular lo relacionen con el nivel de estudios con que cuenta, tales como el ***título y/o cédula profesional***, independientemente de que estos sean o no medios de identificación oficiales.
9. Expuesto lo anterior, se reitera que la pretensión del **RECURRENTE** es obtener el ***Título o*** *Cédula Profesional* de aquellos servidores públicos que ostentan el cargo de *Titular o Director*, en este sentido, se concluye que el **SUJETO OBLIGADO** satisfizo el derecho de acceso a la información con las documentales proporcionadas mediante informe justificado.
10. Expuesto lo anterior, se presume que, al haber existido un pronunciamiento por parte del **SUJETO OBLIGADO**, aún más del Servidor Público Habilitado competente, a quien le fue requerida la información por el Titular de la Unidad de Transparencia, y haber remitido la información solicitada por medio del informe justificado, este Instituto no está facultado para manifestarse sobre la veracidad, pues no existe precepto legal alguno en la Ley de la materia que lo faculte.
11. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía el criterio 31-10 emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que a la letra dice:

***“El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos proporcionados por los sujetos obligados****. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.”*

1. Precisado lo anterior, no pasa desapercibido que, tanto en respuesta como en informe justificado, el **SUJETO OBLIGADO** hizo entrega de diversas documentales de las cuales refirió que correspondían al Título Profesional, Historial Académico y Diplomas de los Directores y Titulares de Área de los cuales la cédula profesional se encuentra en trámite.
2. En este sentido, se advierte que dichas documentales fueron entregadas en una versión pública incorrecta, motivo de inconformidad del Particular.
3. Relativo a lo anterior, se testó la fotografía de Servidores Públicos que ostentan un cargo de mando medio o superior, siendo este un dato personal público. Aunado a lo anterior, se desconoce el total de datos que fueron testados, toda vez que, no se proporcionó el acuerdo del Comité de Transparencia, mediante el cual, se propuso y aprobó la clasificación de la información como confidencial.
4. Así, respecto a la **fotografía de los servidores públicos**, es necesario señalar que estas dan cuenta de las características físicas de los servidores públicos; por lo que, no debe perderse de vista que la imagen personal es la apariencia física, la cual puede ser captada en dibujo, pintura, escultura, fotografía, y video; la imagen así captada puede ser reproducida, publicada y divulgada por diversos medios, desde volantes impresos de la forma más rudimentaria, hasta filmaciones y fotografías transmitidas por televisión cine, video, correo electrónico o Internet.
5. Así, dichos datos constituyen la reproducción fiel de las características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual; lo que en el presente caso, acreditaría e identificaría a una persona como servidor público, por lo que es posible advertir que existe cierto interés público, cuando la fotografía obra en documentos de servidores públicos vinculados con el cumplimiento de disposiciones legales.
6. Por lo anterior, cuando las fotografías de los servidores públicos obran en documentos que dan cuenta del cumplimiento de funciones, requisitos legales o los acredita como servidores públicos, no puede ser clasificado como confidencial, pues en este caso, es superado por el interés público de conocer si en realidad, la persona que se ostenta en carácter de servidor público, se encuentra en ese encargo, si realiza las funciones o si cumple con los requisitos legales; sin que se considere como factor diferenciador para determinar la publicidad o clasificación el cargo o nivel jerárquico en el que se desempeñe el servidor público.
7. En este sentido, las fotografías de servidores públicos sin importar el nivel o rango guardan la naturaleza de públicas (con excepción del personal operativo en materia de seguridad) y no procede su clasificación, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que en las versiones públicas que se ordenen, no podrá clasificarse esa información,
8. En consecuencia, la fotografía de los servidores públicos, es de acceso público y no procede su clasificación como información confidencial, aún y cuando corresponde a un dato personal.
9. Precisado lo anterior, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO no proporcionó el Acuerdo de Comité del Transparencia, por medio del cual, se propuso y aprobó la clasificación de diversos datos como información confidencial**
10. En este caso, es importante señalar que la clasificación total o parcial de la información requerida mediante solicitud de acceso a la información pública, constituye una restricción al derecho humano de acceso a la información.
11. Así, la clasificación total o parcial de la información es un supuesto que tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establecen el procedimiento legalmente establecido, para ello.
12. Al respecto, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, por cuanto hace a la clasificación de la información, señalan lo siguiente:

*“****Quincuagésimo.*** *Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán utilizar los formatos contenidos en el presente Capítulo como modelo para señalar la clasificación de documentos o expedientes, sin perjuicio de que establezcan los propios.*

***Quincuagésimo primero.*** *La leyenda en los documentos clasificados indicará:*

*I. La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la clasificación, en su caso;*

*II. El nombre del área;*

*III. La palabra reservado o confidencial;*

*IV. Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso;*

*V. El fundamento legal;*

*VI. El periodo de reserva, y*

*VII. La rúbrica del titular del área.”*

1. Así, una vez hecho lo anterior, **se remite la información al Titular de la Unidad de Transparencia, con el acuerdo de clasificación correspondiente, para que sea sometido al conocimiento del Comité de Transparencia.**

**La intervención del Comité de Transparencia.**

1. **Formalidades para emitir el Acuerdo de Clasificación.**
2. El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos 128 y 103 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, y la fracción III del numeral Segundo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en adelante los Lineamientos Generales, cuenta con las facultades para **confirmar, modificar o revocar** la clasificación de la información que ha hecho el titular del área que administra la información. Por lo tanto, el Comité **no aprueba** la clasificación, sino que revisa lo que ha hecho el titular del área y confirma, modifica o revoca la decisión a través de un acuerdo.
3. Evidentemente, esta decisión implica una restricción a un derecho humano, por lo tanto, puede generar un agravio al Particular y, en consecuencia, es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello, es decir, que cumpla con el principio de reserva de ley, por lo que no está demás señalar que el artículo 45 de la Ley Estatal, claramente señala que el Comité de Transparencia, legalmente facultado para emitir el acuerdo de clasificación, se integra por el Titular de la Unidad de Transparencia, el responsable del área coordinadora de archivos y el titular del órgano interno de control, integrado siempre por un número impar y que no debe de existir dependencia jerárquica entre sus integrantes. Cualquier otra composición del Comité puede generar vicios de legalidad de origen en el acto que restringe un derecho humano.
4. La decisión de confirmar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo aprobado por el Titular del área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia.

**b) Requisitos de fondo del Acuerdo de Clasificación.**

1. Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro.
2. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley nos aporta mayores luces para cumplir con dicha acreditación. En los artículos 131 y 105 segundo párrafo de la Ley Estatal y de la Ley General respectivamente, y el lineamiento sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales, al señalar que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación.
3. De lo anterior, se desprende que, **para una correcta clasificación total o parcial, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas**, **es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.**
4. Por su parte, el intérprete judicial del país ha establecido una jurisprudencia respecto a qué debe entenderse por fundamentación y motivación, en los siguientes términos:

***FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.*** *“La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.”*

*SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.*

*Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.*

*Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.*

*Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.*

*Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.*

*Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.*

1. Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.
2. En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que, en el acto de autoridad, además de contenerse los supuestos jurídicos aplicables se expliquen claramente por qué a través de la utilización de la norma se emitió el acto.
3. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
4. En consecuencia, el S**UJETO OBLIGADO** deberá hacer entrega, en correcta versión pública, los documentos proporcionados de los Titulares y Directores de Área de los cuales se refirió que, la cédula profesional se encontraba en trámite al uno e julio de dos mil veintidós, con el respectivo Acuerdo de Clasificación, de Conformidad con lo establecido en el **Considerando QUINTO** de la presente Resolución.
5. Finalmente, no pasa desapercibido que en la página 7 del documento denominado “SOLICITUD #00249 (1)” remitido en respuesta, se dejó a la vista el código QR en un Certificado Total de Estudios, el cual al ser escaneado dirige a una página donde se puede apreciar el “promedio” de un Servidor Público, dato susceptible de ser clasificado como confidencial, lo que puede considerarse como una transgresión al derecho de protección de datos personales; por lo que se ordena dar vista a la Dirección General de Protección de Datos Personales de este Instituto, para que resuelva lo conducente y determine, en su caso, el grado de responsabilidad del **SUJETO OBLIGADO**; esto con fundamento en el artículo 82, fracción XXVII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## **QUINTO. De la versión pública.**

1. Debe destacarse que, debido a la naturaleza de la información solicitadaeventualmente pudieran obrar datos personales susceptibles de protegerse, y toda vez que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México tiene el deber de velar por la protección de los datos personales aun tratándose de servidores públicos y en su caso generar la versión pública de los documentos por las consideraciones que se estimen pertinentes.
2. La clasificación total o parcial de la información requerida, mediante solicitud de acceso a la información pública, constituye una restricción al derecho humano de acceso a la información. Actualmente, el grave problema que enfrentamos son los Acuerdos de Clasificación de la Información que emiten los **SUJETOS OBLIGADOS**, ya que no observan los requisitos que deben de llevar a cabo para la realización de la clasificación de la información, tanto por la complejidad del procedimiento como por la falta de atención de los operadores jurídicos, por lo que es menester reiterar los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Requisitos previos. | Los artículos 100 y 122 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que si los Sujetos Obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación, es deber de los titulares de las áreas proponer su clasificación y no del Comité de Transparencia.  Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata, señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).  Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente.  El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados. |
| b) Supuestos de clasificación. | Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.  Los artículos 116 y 143 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial. Mientras que los artículos 105 y 130 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.  El **SUJETO OBLIGADO** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información. |
| c) Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación. | El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos cuenta con las facultades para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que haya propuesto.  Es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello.  La decisión de aprobar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo propuesto por el Titular del área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia. |
| d) Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación. | Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley señala que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los **Sujetos Obligados**, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación.  De lo anterior, se desprende que para una correcta **clasificación total o parcial**, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.  Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.  En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  Ahora bien, **para cada caso además de fundar y motivar**, se debe identificar con claridad que datos contenidos en las documentales que son susceptibles de suprimirse, por ejemplo; Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), claves de seguros, préstamos o descuentos personales, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, entre otros. |
| e) Condiciones especiales de la clasificación de la información como confidencial. | Los artículos 148 y 120 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, establecen que aun tratándose de datos personales, se podrán proporcionar, incluso sin solicitar el consentimiento de su titular.  En el caso de lo señalado en la fracción IV, será el Instituto quien deba aplicar la prueba de interés público, considerando también que como recientemente ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen menor de protección.  Pero si la información que se pretende clasificar como confidencial no se encuentra en los supuestos de los artículos señalados y es posible, se deberá consultar al titular de los datos si permite o no el acceso. De no ser posible, la realización de la consulta, procede, fundando y motivando, la clasificación. |

1. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes:

## **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Resultan fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **12568/INFOEM/IP/RR/2022,** en términos del **Considerando** **CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICA** la respuesta emitida por el **Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal** y se **ORDENA** entregar vía Sistema de Accesos a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, lo siguiente:

1. **Ficha curricular o documento análogo de los Titulares y Directores de Área adscritos a la Administración Municipal de Coacalco de Berriozábal al uno de julio de dos mil veintidós, de ser procedente en versión pública.**
2. **En correcta versión pública, las documentales proporcionadas de los Titulares y Directores de Área de los cuales se señaló que la cédula profesional se encontraba en trámite al uno de julio de dos mil veintidós.**

*Para la entrega en versión pública deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen y se ponga a disposición del recurrente.*

**TERCERO. Notifíquese** a presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; **dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles,** e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** Notifíquese a**l RECURRENTE** la presente resolución, vía **SAIMEX**.

**QUINTO.** Se hace del conocimiento del **RECURRENTE** que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

**SEXTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**SÉPTIMO. Gírese** oficio al Titular de la Dirección General de Protección de Datos Personales, en atención al artículo 82, fracción XXVII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios en términos de lo señalado en el **Considerando CUARTO** de la presente resolución.

ASÍ LO APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA EMITIENDO VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EMITIENDO VOTO PARTICULAR; EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, fracción I. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibídem. Parr. 87. [↑](#footnote-ref-4)
5. https://dle.rae.es/?id=Bk5TdI5 [↑](#footnote-ref-5)